

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN.

Sr. Juez:

Ariel Sáenz Teixeira, en mi carácter de Auxiliar Fiscal de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, sita en Paseo Colón 1333, piso 11° CF de esta Ciudad, en el caso MPF 712213 (IPP 89.171/2022-0) caratulado "MANGANO, Norma Mabel s/ art. 89 del CP" me presento y, respetuosamente, digo:

I.- OBJETO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 291 del Código

Procesal Penal, vengo a interponer el recurso de apelación contra la decisión, por la cual, el día 3 de Mayo de 2022, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, resolvió: "I. NO HACER LUGAR al pedido de prisión preventiva de la señora Norma Mabel Mangano (...) y, en consecuencia, ORDENAR su inmediata libertad con relación al hecho que diera origen a este proceso; II. IMPONER sobre la señora Norma Mabel Mangano (...) que deberá cumplir con las medidas restrictivas consistentes en a)

figurar residencia en la Asociación Civil 'No Tan Distintas' - Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social (sita en la calle Uruguay 69, de esta ciudad), por cuanto se verificó por secretaría que de esa entidad se han comprometido a informar cualquier inconveniente que se pudiera suscitar con la acusada; b) comparecer cada quince (15) días ante la sede de este juzgado, a fin de ponerse a disposición; c) abstenerse de tomar

contacto por cualquier medio -directo, indirecto, personal, telefónico, digital, epistolar y por interposición persona, entre otroscon el señor Walter Fabián González (D.N.I. nº 24.446.238); y, d) abstenerse de acercarse a menos de quinientos (500) metros del lugar en el que se encuentre el señor Walter Fabián González (D.N.I. nº 24.446.238); III.

ADVERTIRLE a la señora Norma Mabel Mangano (...) que en caso de incumplir las medidas restrictivas aquí impuestas pondrá en riesgo su libertad y se considerará que incurrió en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal; y, IV. HACERLE SABER a la señora Norma Mabel Mangano (...) que deberá presentarse ante este juzgado a fin de notificarse de lo aquí resuelto y dar cuenta de su nuevo domicilio, a -a su vez-

será constatado por secretaría". Ello, por cuanto considero que debe revertirse esa decisión y hacerse lugar a la medida cautelar solicitada, por los argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer.

II.- ADMISIBILIDAD:

La vía recursiva se presenta en tiempo oportuno (artículos 292 y 184 del CPP, teniendo en cuenta que, los fundamentos de la resolución se dieron a conocer el día 3/5/2022) y se dirige contra una decisión expresamente declarada apelable (artículo 184 del CPP) la cual, además, causa un gravamen de imposible resolución ulterior, en la medida en que afecta el normal desenvolvimiento del proceso, y su resultado, perjudicando el correcto impulso de la acción penal en el caso.

Además, se encuentran reunidos los requisitos subjetivos para impugnar, toda vez que el Ministerio Público Fiscal resulta ser parte en el proceso, por lo que se encuentra legitimado y agravado con la decisión adoptada, que resulta contraria a sus intereses.

III.- ANTECEDENTES, AGRAVIOS Y FUNDAMENTOS:

En lo que atañe al pedido de la medida cautelar de prisión preventiva, en el marco de la audiencia prevista en el art. 172 del CPP, el pasado día 2 de mayo del corriente, a las 15:24 horas. Esta Unidad, fue notificada de la fijación de la fecha de audiencia, el día 3 de mayo a las 10:00 horas y la audiencia de prisión preventiva, propiamente dicha, se fijó inmediatamente después, esto es para el día 3 de mayo a las 12:00 horas, circunstancia que, como se verá luego, resulta relevante debido a que este Ministerio Público Fiscal estaba produciendo medidas de prueba en forma paralela.

Una vez sustanciada la audiencia y concluida la intervención de las partes, el Sr. Juez consultó a esta Fiscalía si, en el caso, se contaba con un informe médico y, ante la respuesta afirmativa por parte de este representante del Ministerio Público Fiscal, esto es, que existía un informe médico y que el mismo se estaba produciendo en forma concomitante a la audiencia, el magistrado resolvió del modo antedicho, quedando sus fundamentos plasmados en la grabación de la audiencia, los cuales paso a enunciar.

El magistrado sostuvo que, con las evidencias rendidas en la audiencia, es posible sostener que, en principio, el pedido de prisión preventiva, resulta prematuro.

Básicamente argumento que, el pedido resulta prematuro porque en esta etapa embrionaria de la investigación no se cuenta aún con un informe médico legista con la opinión de un experto, calificado, que permita sostener que existieron las lesiones que se le atribuyen a la imputada.

El Juez sostuvo de manera clara, concisa y sintética que en nuestro

ordenamiento rige el principio de amplitud probatoria, el cual sostiene que los hechos de un caso pueden ser probados por cualquier medio de prueba.

Finalmente, el distinguido magistrado, sostuvo que la relación de

causalidad y la imputación de un resultado es una tarea que debe ser verificada por la

Fiscalía, de conformidad con la presunción de inocencia.

Por último, concluyó que una foto no es una opinión calificada de un

experto y que, concretamente, es necesario un informe médico para saber la relación

causal, el modo, el tiempo y si las lesiones son compatibles con la conducta. Sin este

contexto, dijo el Juez, que hay una acción pero no un resultado.

Cabe destacar que el magistrado aclaró que ese es el argumento principal

del rechazo y que hasta tanto se determine dicho extremo, corresponde imponer reglas de

conducta y disponer la inmediata libertad de la imputada.

Sentado ello, en línea con lo que sostuvo en el marco de la audiencia

celebrada el pasado 3 de mayo del corriente, entiendo que la decisión del Sr. Juez debe

ser revocada y que, para asegurar los fines del proceso, es necesario la imposición de la

prisión preventiva requerida por los siguientes motivos, a saber:

I.- En primer lugar, se le atribuye a Norma Mabel Mangano

haber causado daños en el cuerpo de Walter Fabián González, el día 30 de abril, a las 14

horas, en el interior del inmueble sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín

nro. 4550 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello sucedió luego de que Mangano

ingresara a dicho inmueble, en donde reside González, quien en ese momento almorzaba

con dos (2) amigos, y primero le dijo "ESTA ES MI CASA YO ENTRO CUANDO

QUIERO". Acto seguido, mientras se retiraban los amigos de González, Mangano

comenzó a agredirlo físicamente propinándole golpes de puño y rasguños a la altura de la

ceja, cuello, y mejillas del lado derecho, generando las lesiones que surgen de las fotos

incorporadas, más precisamente bajo el ojo, a la altura del pómulos. A continuación,

cuando González logró zafarse y salió al exterior de la vivienda, Mangano lo persiguió y

comenzó a arrojarle piedras, apuntando al cuerpo de González, las que no llegaron a

impactarle. Finalmente, González se encontró con sus amigos en las cercanías y, al volver

a su domicilio, Mangano aún se encontraba allí, reiniciándose las agresiones físicas en su

contra (con golpes y patadas), las cuales siguieron al arribo del personal policial, siendo

que en un momento, también tomó una cadena que se hallaba en el piso, con la cual

intento golpear a González, lo cual no fue posible por la distancia; haciendo también lo propio con un vaso de agua, que se le había facilitado para calmarla, el cual terminó arrojando contra González, rompiéndolo contra la pared.

En ese primer momento, al formularse el decreto de determinación de los hechos (art. 92, CPP) y al celebrar el acto de intimidación (art. 172, CPP) se estimó que la calificación jurídica adecuada para tales comportamientos encuadra provisoriamente en el delito de lesiones leves dolosas previsto en el artículo 89 del Código Penal.

2.- En aquel primer momento, el Auxiliar Fiscal, Sebastián Corral Galvano, formuló el decreto de determinación de los hechos (art. 92 del CPP) y ordenó la producción de un informe médico legista, conforme surge de la declaración del Inspector Leandro Martín Garay y del resultado de la consulta con el Fiscal.

Dicho informe médico, fue requerido en reiteradas oportunidades y por distintos medios por esta Unidad, debido a que su producción se demoró porque la víctima carecía de dinero para poder desplazarse, toda vez que Walter Fabian González que debió tomar una changa laboral, circunstancia que obligó al desplazamiento de un móvil policial, la ubicación de la víctima y su traslado a la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, conforme se desprende del informe del investigador Nro. 15 y 22. Al momento de celebrar el acto de la intimidación de los hechos (art. 172 del CPP) y pese a que se estaban produciendo los informes médicos aludidos, se estimó que la calificación jurídica adecuada para tal comportamiento imputado, era la más benigna para la imputada, es decir, el encuadre legal en el delito de lesiones leves dolosas (art. 89 del CP).

El Fiscal Auxiliar interviniente, llegó a dicha conclusión, sobre la base de los distintos elementos de prueba reunidos e incorporados al sumario, los cuales no solo resultaron contestes sino que además son suficientes para probar el hecho, me refiero, nada más y nada menos, que a la versión de la víctima, a la versión del oficial de la policía que resultó testigo presencial de los hechos y de las lesiones que presentaba la víctima, a las declaraciones de dos testigos presenciales del momento en que la imputada se presentó en el domicilio agredido y lesionó a la víctima y del testimonio de una vecina, quien también resultó ser testigo presencial de una parte del mismo acontecimiento. Ello, además de la declaración testimonial del denunciante Armando Pontarollo en relación a los hechos del día 29 y 30 de Abril del corriente, que lo tienen como víctima de la

imputada, si una segunda víctima, el mismo día en que ocurrieron los hechos que se investigan en este caso.

En efecto, se tratan de cinco (5) testimonios contestes, que acreditan que

la imputada se presentó, de manera súbita, en el domicilio de la víctima, que la imputada es una persona conocida del barrio, que la todos reconocen como "Nadia", que ese día ingresó en el inmueble -el cual no se encontraba con llave- y le refirió a la víctima y los dos testigos presenciales -Carlos Diego Aguirre y Maria Nazareth Fappiano- que podía presentarse en el lugar las veces que ella quisiera, como si fuera o se trata de la propietaria del inmueble y quien, frente a los cuestionamientos de la víctima para que abandone el domicilio, comenzó a agredir a Walter Fabian López con golpes, patadas y rasguños.

Además, el Auxiliar Fiscal actuante describió de manera concreta y detallada las lesiones de importancia leve que la imputada le produjo a la víctima con el objeto de garantizar el debido proceso y el adecuado ejercicio del derecho de defensa de la imputada, esto es, el modo en que la imputada las produjo, el medio comisivo -golpes, patadas y rasguños- y el lugar exacto del cuerpo y del rostro en donde fueron producidas. Incluso, para ser aún más claro e ilustrativo acerca del tipo de lesiones y de su importancia leve, el Auxiliar Fiscal interviniente, mencionó las fotografías que ilustran dichas lesiones en los dos actos procesales aludidos, me refiero al decreto de determinación de los hechos y al acta de intimación de los hechos. Ello, reitero, mientras en forma paralela y concomitante se estaban produciendo los informes médicos, los cuales fueron recibidos en esta Unidad el mismo día en que se celebró la audiencia, después de finalizada la audiencia y con la conclusión, en ambos casos, de que la víctima presentaba lesiones de importancia leve.

De hecho, uno de los informes médicos, el producido por la Dra. Laura E. Peretti del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, se produjo sobre la base de las mismas vistas fotográficas mencionadas por el Auxiliar Fiscal en sus intervenciones, al punto que dicha mención, a diferencia de lo que sostuvo el magistrado, permitió establecer que -el mismo día de la audiencia- que las lesiones contusas descritas (excoriaciones, equimosis y probable hematoma labial superior) resultaron de importancia leve y habrían sido producidas por golpe o el choque contra una superficie dura y/o rugosa y que resultaban compatibles con un golpe de puño o con la utilización de la uñas.

No obstante ello, el día 30 de Abril de 2022, a las 18:10 horas, se realizó el informe médico legal de la víctima, con su comparecencia presencial ante la División

de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, conforme fuera ordenado en la consulta inicial y lo informado al magistrado en la audiencia. En efecto, después de múltiples diligencias se logró encontrar a la víctima, a quién se trasladó hasta dicha división y el resultado de este informe confirma la posición de la Fiscalía, esto es que la víctima presenta escoriaciones superficiales ubicadas en la órbita ocular izquierda y en maxilar inferior lado izquierdo y en pabellón auricular izquierdo, presentando también hematoma en región supraciliar izquierda. Mecanismo posible golpe roce y/o choque con o contra superficie dura y/o rugosa, data aparente, 48 a 72 hs, que de no mediar complicaciones sanarán en menos de 30 días.

En ambos casos, dichos informes fueron puestos en conocimiento de la defensa, a través del sistema informático Kiwi.

Como puede advertirse, esto es muy distinto del argumento que, en parte, atraviesa la decisión del Sr. Juez y, esto se debe a que la Fiscalía no busco probar por fotos las lesiones que, dicho sea de paso, conforme al principio de amplitud probatoria es perfectamente viable, sino que como fuera explicitado, la intención del Auxiliar Fiscal fue la de ilustrar el motivo por el cual, no obstante la violencia desplegada por la imputada y la forma en la que se produjo el acceso de esta persona a la vivienda, se escogió la calificación mas benigna para la imputada, producto de la importancia leve de las lesiones.

Es decir que, cuando esta Fiscalía señaló en la audiencia, ante la consulta del Sr. Juez, que contaba con los informes, que estos habían sido ordenados y que se estaban produciendo, esta circunstancia no solo era cierta, sino que además era perfectamente verificable. Ello, al punto que ese mismo día los dos informes fueron incorporados al caso.

Esta aclaración, resulta de suma importancia para ilustrar porque los hechos fueron descriptos del modo en que quedaron consignados en el decreto de intimación de los hechos y en la audiencia de intimación, con tanto nivel de detalle y con el celo de recurrir a las imágenes como una forma de garantizar el debido proceso y el conocimiento adecuado del hecho por parte de la imputada y su defensa.

Paralelamente, esta Unidad, gestionó la producción del informe médico, siempre con el plazo legal para intimar a una persona detenida corriendo y con una víctima que, no contaba con los recursos económicos para llegar a la Dirección de Medicina Legal y a quién se logró ubicar y trasladar para poder contar con el informe.

Este celo, por precisar las razones por las cuales esta parte no contó con el informe al momento de la audiencia, tiene que ver con la necesidad de clarificar un punto que resulta clave en la decisión que adoptó el Sr. Juez.

El magistrado dijo, en aquella oportunidad, que la falta del informe era la razón principal por la cual decidió del modo en que lo hizo y que aquí se cuestiona.

Sin embargo, la Fiscalía presentó su caso en la audiencia, con una gran cantidad de elementos de prueba reunidos e incorporados al caso en menos de cuarenta y ocho (48) horas, los cuales resultan suficientes para tener por probados los hechos—esto es el delito de las lesiones leves atribuidas a la imputada—con el grado de provisionalidad de esta etapa embrionaria—en palabras del propio Juez—y de conformidad con las exigencias de una medida cautelar como la requerida.

Recuérdese, que aun cuando se trata de la medida cautelar más grave que tiene el proceso penal, la materialidad que se exige para tener por probada una medida restrictiva de este tipo no resulta equivalente al estándar probatorio que se exige para el dictado de una sentencia condenatoria y este, es uno de los tantos puntos confusos de la decisión adoptada por el Juezgado.

El Sr. Juez reconoce, por un lado, el principio de libertad probatoria (propio de este sistema de enjuiciamiento) y, acto seguido, en una decisión que debe ser calificada como contradictoria, descarta que el delito de lesiones leves pueda probarse por cualquier medio cuando exige que, solo puede tenerse por acreditado por el informe médico y no, en cambio, con otros medios y elementos de prueba.

En particular, me refiero a los cinco (5) testimonios prestados por las cinco (5) personas que, bajo juramento de decir la verdad, afirmaron que los hechos sucedieron del modo descrito en la imputación formulada por esta Unidad y que las lesiones, que se verificaron en el cuerpo de la víctima, fueron producidas por la imputada.

a.- La víctima, **Walter Fabián González**, presto declaración y sus dichos fueron ampliados por esta Unidad. El damnificado fue muy claro, explicó que es amigo de la imputada a quien conoce como “**Nadia**” y que, como la nombrada se encuentra en situación de calle en algún momento, cuando su madre vivía, le brindaron cobijo en su domicilio para que esta última pudiera dormir dos o tres días, pero que nunca vivió en el lugar y que, si bien se recibieron “comunicaciones judiciales” en el lugar, esto se explica porque la imputada debe haber bridadado ese domicilio. La víctima explicó que, el día de los hechos, cerca de las 14:00 horas, cuando estaba almorzando con dos amigos, Carlos

Diego Aguirre y con María Nazareth Fappiano, de imprevisto ingresó en su casa la imputada, quien estaba eufórica, fuera de sí y refiriendo todo tipo de improperios en relación a una tercera persona—identificado luego como Armando Pontarollo— a quien estaba dispuesta a “meterle un palo en el orto”. En ese contexto, la víctima explicó a la imputada que debía golpear la puerta de su casa antes de entrar, a lo que esta última, le respondió que “esta era su casa y que ella entraba cuando quería”. El damnificado le dijo que eso no era así, afirmó que nunca vivió en el lugar y que, la imputada estaba tan eufórica y violenta que, por temor, empezó a dirigirse hacia el baño mientras que, los testigos -Aguirre y Fappiano- decidieron abandonar la finca. Fue entonces, cuando el damnificado se dirigía hacia el baño que la imputada se le fue encima y comenzó a agredirlo físicamente con golpes de puño, patadas y rasguños provocándole lesiones en el rostro, más precisamente rasguños por encima de la ceja, en el cuello y en las mejillas del lado derecho. En consecuencia, el damnificado, salió corriendo de la vivienda al igual que lo habían hecho previamente sus dos amigos, siendo perseguido por la imputada, quien cayó en el camino sobre unas macetas y comenzó a tomar piedras de los canteros y a arrojarlas. La víctima, corrió hasta la calle Carrasco y Remedios de Escalada de San Martín de esta ciudad, en donde se encontró con sus amigos -Aguirre y Fappiano- quienes le pidieron que suba a un vehículo, le consultaron por cómo estaba y se dirigieron hacia el domicilio. Una vez en la vivienda, puntualmente, en el pasillo de acceso, tanto la víctima como los testigos se encontraron de nuevo con la imputada quien comenzó a agredir al damnificado nuevamente hasta que llegó al lugar el personal policial y las agresiones y la hostilidad derivaron en el Inspector Garay. Fue entonces, cuando la imputada les dijo que había sido víctima de violencia de género. Cabe destacar que, el damnificado, explicó que la imputada tiene problemas con el consumo de drogas y que además estuvo presa. Que tiene conocimiento de esto último porque llegaban las “comunicaciones” del penal y de los juzgados a su domicilio. La víctima, Walter Fabián González instó la acción penal y especificó en el informe producido por esta Unidad que, presenta un golpe no visible en el cuerpo, rasguños en el rostro y un raspones debajo del pómulo, en uno de sus ojos.

b.- El testigo presencial, **Carlos Diego Aguirre**, explicó bajo juramento de decir la verdad que, es amigo del damnificado, que ese día estaban almorzando en el domicilio de Walter Fabián González junto a otra amiga llamada María Nazareth Fappiano, cuando a las 13:00 horas, de manera imprevista y súbita, ingresó en el interior

La testigo presencial **Maria Nazareth Fappiano**, explicó que el día del hecho a las 13:00 horas, se encontraba almorzando en la casa de la víctima, Walter Fabián González junto a su amigo Carlos Diego Aguirre cuando imprevistamente ingreso en el domicilio una mujer a la que conocen en el barrio como "Nadia" y que manifestaba todo tipo de improperios, al punto de haber afirmado que a otro vecino, Armando Pontarollo, "le metería un palo en el orto". Explicó que, debido a que la imputada es una persona agresiva decidió junto a Carlos Diego Aguirre, retirarse del lugar. Que en ese momento, cuando se disponían a abandonar el lugar, la imputada comenzó a golpear con golpes de puño y patadas a la víctima. La testigo y Carlos Diego Aguirre salieron del lugar y se refugiaron el automóvil de este último. Unos minutos después salió corriendo a toda marcha la víctima y detrás de este lo venía persiguiendo la imputada quien venía arrojándole piedras. Incluso, dijo que las lesiones que presentó el imputado eran visibles y que, por esta razón, fueron con el auto en su búsqueda, y después de verificar que estaba lesionado, decidieron regresar al domicilio, en cuya puerta se encontraba la imputada,

antes pasó exactamente lo mismo con Armando Pontarollo.

testigo explicó que esto no es la primera vez que sucede con la imputada y que, un día policial y, la imputada, refirió haber sido víctima de violencia de género. Por último, el y comenzó a agredir a la víctima de nuevo con golpes de puño hasta que llegó el personal estando la imputada "Nadia", quien se mantenía en la misma actitud, sumamente agresiva calle Carrasco y que lo fueron a buscar en el auto y regresaron al inmueble donde seguía corriendo detrás con piedras en sus manos. Explicó que el damnificado escapó hacia la corriendo desde el interior de la vivienda, con lesiones en el rostro y a la imputada Después de unos minutos escucho gritos y pudo ver a Walter Nazareth Fappiano salir entonces cuando decidió huir y subir a su rodado para aguardar en la puerta del domicilio. comenzó a pegarle a Walter Fabián González golpes con los puños y patadas. Fue empujados a levantarse de la mesa, siendo que en ese preciso instante la imputada retirarse del lugar junto a Maria Nazareth Fappiano, motivo por el cual, enseguida una persona agresiva y que cuando se presentó en el domicilio tomó la decisión de en el orto". El testigo presencial, explicó que tiene conocimiento de que la imputada es en la casa y comenzó a gritar y a decir que, a Armando Pontarollo, "le iba a meter un palo eufórica y, probablemente, bajo el efecto de algún estupefaciente. En ese estado, ingreso de la vivienda una mujer conocida del barrio de nombre "Nadia", quien se encontraba

quién de inmediato se puso agresiva y comenzó a golpear la víctima, hasta que llegó el personal policial y, la imputada dijo ser víctima de violencia de género.

La testigo presencial **Diana Ayala**, explicó que el día del hecho a las 13:10 horas, en circunstancias en que se encontraba en su domicilio sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín nro. 4550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzó a escuchar gritos y, al observar por la ventana, pudo ver a una mujer a quien conoce como Norma Mabel Mangano, agrediendo físicamente a su vecino de nombre Walter Fabián González con golpes de puño y patadas y arrojando elementos contundentes contra su vecino Walter Fabián González, quien intentaba sacarla fuera de la propiedad, a tiempo que la imputada se resistía. Que esta persona estaba muy violenta, que amenazaba y que insultaba, razón por la cual, llamó al 911. La testigo dijo que, no es la primera vez que suceden hechos de este tipo con la imputada.

El testigo presencial y del procedimiento **Leandro Martín Garay**, Inspector de la Policía de la Ciudad, quien refirió que, el día del hecho, cerca de las 13:15 horas, fue desplazado hasta el inmueble por violencia de género. Una vez en el lugar, pudo corroborar que la puerta estaba abierta y que el interior del pasillo, había una pareja discutiendo y que la mujer estaba agrediendo en forma verbal y física a la víctima, Walter Fabián González. Que el testigo pudo corroborar que la imputada le pegaba golpes de puño y patadas a la víctima, incluso en presencia del personal policial. Que, cuando llegaron comenzó a agredir al personal policial, tomó una cadena del piso y empezó a agredir a todas las personas que se encontraban en el lugar. El oficial de policía pudo verificar la existencia de rasguños y de raspones en el rostro de la víctima y comprobó por los dichos de esta última y de los tres (3) testigos que el hecho sucedió del modo en que fuera descrito. Por último, dejó constancia que la imputada denunció que había sido víctima de violencia de género pero que, ese día y en ese momento, la imputada no presentaba lesiones visibles. Que, en presencia de testigos labró las actas del procedimiento, llevó adelante la detención de la imputada y secuestró dos cuchillos del bolso de la imputada y la cadena con la quiso agredir a todos los presentes.

El testimonio del denunciante **Armando Pontarollo** quien mientras sucedía este hecho, se presentó en la Comisaría interviniente para denunciar un hecho de similares características. En efecto, el día 30 de Abril del corriente –el mismo día- en este caso, a las 11:30 horas. Ese día –una hora y media antes del hecho objeto de este caso- de que sucedieran los hechos de este caso, la imputada se presentó en el domicilio de

afirmar que la imputada ingresó de imprevisto en la casa de

- La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en antecedentes penales por homicidio.

“Nadia” y que se trata de una persona violenta y con

afirmar que la imputada, es conocida en el barrio como

- La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en

probado, en este estado inicial del proceso, que:

testimoniales producidas por esta Unidad, las cuales fueron mencionadas específicamente en el marco de la audiencia de prisión preventiva, esta Fiscalía considera que se encuentra Ahora bien, de un análisis conjunto y detallado de las declaraciones

que podrían atestiguar en el mismo sentido que el denunciante.

kiosquero del barrio, que aun no han sido citados por este Ministerio Público Fiscal pero Por último, explicó que cuenta con testigos presenciales como Alicia Morel y un a presentarse –en reiteradas ocasiones– en su domicilio para intentar quedarse a dormir. homicidio y que hace menos de un mes la dejaron en libertad y desde entonces comenzó denunciante, explicó que tomó conocimiento que la imputada estuvo detenida por ido. En ese momento, verificó el faltante de dos mil (\$) 2000 pesos, en efectivo. El su propio domicilio para regresar unos minutos después, cuando esta última ya se había clavárselo en el cuerpo. El denunciante explicó que, en ese contexto decidió abandonar vivienda, oportunidad en la cual, saco un cuchillo “Tramontina” del bolso e intentó fue entonces cuando lo golpeo con una honda que lleva consigo y logró así, ingresar a la domicilio, con la misma intención de ingresar a la vivienda, a lo que el testigo se negó y 29 de Abril del corriente, a las 22:00 horas, la imputada se presentó también en su tenía en su poder de ese lugar. El denunciante, explicó que un día antes, es decir, el día advirtió a la imputada que llamaría a la policía y, esta última, se retiró con los bolsos que porque la víctima pudo cerrar la puerta a tiempo. En ese momento, el señor Pontarollo le de su domicilio y la imputada intentó entrar por la fuerza, pero que no logró hacerlo igual que como mate al otro”. El testigo explicó que, en un momento dado, abrió la puerta mientras le gritaba “puto déjame entrar, devolveme lo que me robaste, te voy a matar estupefactos, oportunidad en la que comenzó a pegarle patadas a la puerta de ingreso, la víctima calificó de eufónico y, según el propio denunciante, bajo los efectos de Armando Pontarollo -sito en la calle Galicia nro. 3764 de esta ciudad– en un estado que

- la víctima alrededor de las 13:00 horas, mientras los tres estaban almorzando.
- La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que la imputada estaba eufórica y agresiva.
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que la imputada dijo -al ingresar de imprevisto a la casa- que a Armento Pontarollo "le metería un palo en el orto".
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que pudieron ver cuando la imputada comenzó a golpear a la víctima, Walter Fabián González, con sus puños, con patadas y con rasguños.
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, cuando verificaron que la imputada ingresó de imprevisto y en forma violenta al inmueble tomaron la decisión de alejarse. La víctima, decidió irse al baño de la vivienda y los testigos abandonar el inmueble y permanecer en la puerta, dentro de un automóvil.
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, la víctima salió corriendo de la casa y que detrás de este último, corría la imputada arrojándole piedras.
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, la víctima salió corriendo y que los testigos lo buscaron, lo subieron al rodado y comprobaron las lesiones.
 - La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, regresaron los tres juntos -en un vehículo- al inmueble y que en la puerta los estaba esperando la imputada, quien continuaba eufórica y agresiva y que cuando se acercaron al inmueble, esta última, comenzó a agredir -por segunda vez- a Walter Fabián González con golpes de puño y con patadas.

- La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, cuando llegó la policía la imputada continuó agresiva y que ella le refirió al personal policial que había sido víctima de violencia de género, por parte de la víctima. La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que, las lesiones leves que presenta la víctima fueron el resultado de las agresiones físicas, de parte de la imputada, específicamente, mediante golpes de puño, con patadas y raspones.
- La víctima, los testigos presenciales y el personal policial fueron contestes en afirmar que, la imputada tomó una cadena que se encontraba en el piso y que, valiéndose de ella, habría comenzado a agredir a todas las personas que se encontraban en el lugar, incluido el personal policial y que, luego, rompió un vaso de vidrio.
- La víctima, los testigos presenciales y el personal policial fueron contestes en afirmar que, debido al estado eufórico y agresivo en el que se encontraba la imputada, el personal policial tuvo que poner a resguardo a la víctima.
- La víctima y los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que la imputada no presentaba lesiones visibles al momento del hecho, a diferencia de la víctima quién, por el contrario, presentaba golpes, rasguños y raspones en su rostro.
- La víctima, los testigos y el denunciante fueron contestes en afirmar que la imputada se encuentra en situación de calle. Dicha circunstancia surge también del propio sumario policial, en particular del legajo de personalidad de la imputada.
- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante fueron contestes en afirmar que la imputada se encontraba en situación de calle y que llevaba consigo dos bolsas de compras y un bolso de color negro.

- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante fueron contestes en afirmar que la imputada regresó al barrio hace aproximadamente un mes, esto es, después de haber quedado en libertad el día 4 de Abril del corriente, en el marco de un proceso penal anterior que se le siguió por el delito de homicidio y en el cual fue condenada.
- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante fueron contestes en afirmar que, desde que la imputada quedó en libertad, en el proceso mencionado por el delito de homicidio, comenzó a presentarse en reiteradas oportunidades tanto en el domicilio de la víctima como así también en el domicilio del denunciante.
- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante fueron contestes en afirmar que, en todos los casos, la imputada, quién se encuentra en situación de calle, se presentó en los distintos domicilios con la intención clara y determinada de ingresar por la fuerza y de permanecer en los distintos domicilios. A su vez, afirmaron que siempre fue de imprevisto y que, en todos los casos, se valió de golpes con los puños, patadas, amenazas, amenazas con armas y por el uso de la fuerza. Incluso, todos afirmaron que esto sucedió varias veces, que se reiteró y agravó con el paso del tiempo.
- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante, fueron contestes en afirmar que, la imputada portaba una honda y armas blancas, con las cuales golpeó y amenazó tanto a la víctima como a la denunciante. Dichos cuchillos fueron secuestrados el día del hecho, en uno de los bolsos de la imputada.
- La víctima, los testigos presenciales y el denunciante, optaron en los tres hechos aludidos en huir de sus propios domicilios, debido al temor que infunde la imputada y al hecho de que es una persona conocida en el barrio por su

comportamiento violento y que todos ellos saben que tiene una condena por haber matado a una persona.

Estos son los hechos del caso que, en cuarenta y ocho (48) horas, esta Unidad pudo tener por acreditados y que constituyen elementos de convicción suficientes como para tener por probado, con el estándar requerido para el dictado de una medida cautelar como la solicitada. La imputada, resulta ser la autora penalmente responsable del delito de lesiones leves, de las que resultó víctima Walter Fabián González.

Dicho estándar, como fuera mencionado, es de un umbral inferior al que se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria.

Recordemos que lo que esta Fiscalía solicitó es el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva y que, por lo tanto, el Sr. Juez debió analizar la prueba que se había reunido en el caso y que fue detallada y valorada en la audiencia, teniendo particularmente en cuenta, el pedido que formuló la Fiscalía, el grado de provisionalidad de cualquier medida cautelar y el estándar probatorio específico.

Por su puesto que, cuando se requirieren este tipo de medidas cautelares y sobre todo cuando se solicitan en los primeros momentos de un proceso, siempre existen medidas pendientes y en curso que podrían –como sucedió de hecho en el caso con los informes médicos producidos– confirmar la hipótesis acusatoria, pero esto no quita que la prueba reunida y rendida en la audiencia hasta el momento del pedido no fuera de por sí suficiente para el dictado de la medida cautelar.

Las cinco (5) personas –la víctima, los testigos presenciales, el oficial de policía y el denunciante– fueron contestes en cuanto a la responsabilidad de la imputada respecto de las lesiones, su forma de producción y el estado de salud de la víctima.

En este aspecto, cabe recordar que cuando el Auxiliar Fiscal actuante ilustró las lesiones leves con las fotos, fue para que puedan ser vistas mientras se producían los informes médicos y que, si bien los hechos tuvieron una gravedad y una violencia inusitada, las lesiones no solo existen sino que además produjeron una modificación significativa en el estado de salud de la víctima.

Incluso, pese al principio de amplitud probatoria que, reitero, permite probar cualquier circunstancia de hecho por cualquier medio de prueba, esta Unidad, ha sido lo suficientemente ortodoxa como para aguardar –mientras corría el plazo de detención del imputado– a la producción de los informes médicos.

En este sentido, considero que el Sr. Juez ha incurrido en un error al valorar la materialidad de los hechos por las siguientes razones, a saber:

La primera, es que no tuvo en cuenta el principio de amplitud probatoria y, por lo tanto, incurrió en una contradicción al haber exigido en una etapa de investigación incipiente -llevaba dos días-, la presentación -en la audiencia- del informe médico de la víctima, incluso frente a la respuesta clara y concisa de esta Fiscalía, de que el informe -efectivamente- se estaba produciendo en forma concomitante a la audiencia. Esta decisión, adoptada del modo en que finalmente se hizo, resulta arbitraria porque al exigir el informe médico y omitir evaluar las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía para probar la comisión del delito de lesiones leves en esta etapa inicial y embrionaria, negó el principio de amplitud probatoria que en la propia audiencia afirmó que resulta aplicable en el caso y a cualquier proceso de trámite por ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando el Sr. Juez exigió probar el caso por un medio de prueba específico -el informe médico- lo que hizo fue establecer una exigencia que no surge del código procesal y que no resulta un mandato expreso del legislador y, por lo tanto, generó una restricción y un obstáculo al principio de amplitud probatoria, con el consiguiente perjuicio para esta parte, que es la principal encargada de promover la persecución penal pública.

Además, dicha exigencia, ha sido tan determinante para el magistrado que pese a que esta parte le informó que se estaban produciendo los informes médicos en forma concomitante a la audiencia decidió, no obstante, del modo que se cuestiona.

En segundo orden, la decisión resultó arbitraria, porque al haber decidido como lo hizo, no solo no se preocupó por las razones por las cuales la Fiscalía no contaba con los informes al momento de la audiencia, sino que omitió por completo valorar en detalle y con la profundidad requerida, todos y cada uno de los testimonios reunidos y presentados en la audiencia, esto es, las declaraciones bajo juramento de decir la verdad de la víctima, de los testigos presenciales, de los oficiales de la policía y del denunciante, lo cual demuestra, justamente, que la decisión no constituye una expresión razonada del derecho vigente.

En tercer lugar, esta decisión pone en evidencia que, el estándar requerido por el Sr. Juez en su fallo es el equivalente al exigido para una sentencia de condena, sin que la decisión tenga particularmente en cuenta que estamos ante una medida cautelar de

prisión preventiva y que, por lo tanto, el estándar probatorio es diferente y de ningún modo puede ser el mismo. Un estándar probatorio, equivalente al exigido para una condena, para disponer una medida cautelar, resulta una interpretación de las normas en juego que resulta arbitraria y que altera por completo las exigencias probatorias establecidas legalmente para acreditar la materialidad de un hecho, en el marco de una medida cautelar.

En cuarto orden, al circunscribir el fallo, a la mera mención de la prueba fotográfica de las lesiones, sin haber analizado ninguno de los restantes elementos de cargo presentados por la Fiscalía en la audiencia, no solo hacen que la decisión sea, como fue advertido, contradictoria y arbitraria, sino que además la convierte en una decisión infundada, puesto que como se sabe, las decisiones judiciales, son la expresión del gobierno judicial, que como uno de los tres (3) poderes del estado, tiene la obligación normativa, de conformidad con la forma representativa y republicana de gobierno adoptada por nuestra carta magna, de motivar y fundar las decisiones, circunstancias que implica la obligación por parte del Juez, de expedirse acerca de todos los planteos y de los puntos controvertidos, así como también respecto de toda la prueba incorporada al caso. Al respecto, cuando solo se refiere a las fotografías, el distinguido magistrado omite, tener en cuenta todos los restantes elementos que presentó, en la audiencia, esta Fiscalía. Recordemos que, el Sr. Juez dijo en la audiencia que, la principal razón por la cual rechazó el pedido de prisión preventiva fue porque la Fiscalía, no presentó el informe médico en cuestión, el cual como se dijo, se estaba produciendo y así se le hizo saber al magistrado en la misma audiencia y antes de decidir el asunto.

En cambio, nada dijo el Juez de los cinco (5) testimonios, de cinco (5) personas distintas, quienes todas bajo juramento de decir la verdad y advertidas de las penas con las que el Código Penal reprime el falso testimonio en una causa penal, explicaron que los hechos del caso sucedieron del modo en que lo explicó la Fiscalía y que, además, con las vistas fotográficas color del rostro de frente, de perfil y del cuello de la víctima, como así también con el secuestro del cuchillo y de la cadena, el hecho estaba en condiciones de tenerse por probado, conforme el principio de libertad y amplitud probatoria, al menos con el grado de provisionalidad requerido, en esta etapa del proceso, para el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva.

Tal como sostiene en la audiencia en donde se terminó resolviendo del modo que recurre, muchas veces las palabras no alcanzan para magnificar la gravedad de determinadas situaciones.

Evidentemente, la decisión adoptada por el distinguido Sr. Juez, adolece de un exhaustivo análisis de los elementos de prueba existentes y, solo así, es posible entender porque adoptó una solución como la que se cuestiona.

De este modo, la decisión adoptada no resulta una expresión razonable del derecho vigente, de conformidad con la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En primer lugar, porque como lo ha señalado y reconocido el propio magistrado, en el marco del proceso penal de nuestra ciudad, rige como una derivación del juicio oral, público, contradictorio, acusatorio y adversarial, el principio de libertad probatoria, es decir, que cualquier parte puede probar un hecho por cualquier medio de prueba legal a su alcance.

Esto implica que, no rige como atañe los sistemas de prueba tasada o la obligación en cabeza de la Fiscalía de probar determinados hechos con determinados medios de prueba.

Como dijo el Sr. Juez de manera concreta, ajustada y sencilla, en este proceso penal rige el principio de amplitud probatoria y, por lo tanto, no existe ningún obstáculo para que una de las partes, si es que así lo desea, acredite un determinado hecho valiéndose de los medios específicos que tenga a su alcance, siempre y cuando los pruebe y esto, sin más, es lo que ha sucedido en este caso.

Por esta razón, como una derivación lógica de este mismo argumento, resulta también falsa la premisa que atraviesa la decisión del Sr. Juez, esto es que el hecho de lesiones leves solo puede probarse a través de un informe médico.

Dicho esto, considero que la decisión que adoptó el magistrado, se ha visto inducida, en alguna medida por la confusa presentación de la teoría del caso de la defensa, que por medio de su alegato busco tergiversar y fragmentar los hechos y, por lo tanto, confundir al Juez.

La estrategia, puede resumirse en seis (6) puntos, con un objetivo muy claro, esto es, cuestionar la materialidad de los hechos.

• La defensa argumentó que no había tenido acceso a algunas pruebas, como por caso, el testimonio de una testigo presencial y del denunciante. Sin embargo, como fue replicado en la audiencia, estas estaban incorporadas y mencionadas en el sumario con lo cual su inactividad, es de su responsabilidad exclusiva.

• La defensa argumentó que la imputada vivía con la víctima, Walter Fabián Sánchez, en el domicilio de la calle Remedios de Escalada nro. 4550 de esta ciudad, circunstancia que, como ha quedado acreditado a la largo de esta presentación resulta a todas luces falso, toda vez que como fuera señalado en la audiencia y acreditado a través del testimonio de la víctima, de los testigos presenciales y del denunciante Pontarollo, la imputada estaba dando vueltas, en situación de calle, por todo el barrio desde que quedó en libertad en otro proceso penal el día 4 de Abril del corriente y al menos desde el día 29 de Abril del 2022, a las 22:00 horas, cuando se presentó en el domicilio de Armando Pontarollo y quiso entrar por la fuerza, para luego presentarse al día siguiente a las 11:30 horas en el mismo lugar y a las 13:00 horas en el domicilio de Walter Fabián González donde fue detenida.

• La defensa argumentó que a las 13:00 horas del día 30 de Abril del corriente, la imputada fue echada del domicilio de la calle Remedios de Escalada nro. 4550 de esta ciudad donde vivía por la víctima, Walter Fabián González, y que la prueba de ello, es que en la audiencia la imputada se encuentra con sus bolsos y sus bolsas, lo que así le mostró al Sr. Juez. Esta circunstancia resulta completamente falsa, toda vez que como fuera expuesto, desde que la imputada recuperó su libertad el día 4 de Abril del corriente, la nombrada se encuentra en situación de calle. El denunciante Armando Pontarollo, explicó que desde entonces, se presenta en reiteradas oportunidades en su domicilio y le pide que le permita ingresar a su vivienda. La primera, el día 29 de Abril del 2022, a las 22:00 horas, cuando la imputada lo amenazó y lo agredió con

una honda y con un cuchillo, el cual intento clavárselo en el cuerpo. La segunda, el día 30 de Abril del 2022, a las 11:30 horas al presentarse en el domicilio de Armando Pontarolo para después presentarse, a las 13:00 horas, en el domicilio de Walter Fabián González. En los tres casos, el procedimiento fue exactamente el mismo. En todos los casos, la imputada se encontraba con bolsas con mercadería y con bolsos con ropa, producto de su situación de calle.

- La defensa argumentó que la imputada y la víctima Walter Fabián González eran pareja, lo cual también resulta falso, toda vez que la víctima negó haber sido pareja de la imputada y, en cambio, quien afirmó que mantuvo una antigua relación de pareja con la imputada fue el denunciante Armando Pontarolo. Además, el argumento parece bastante absurdo puesto que, como fuera dicho a lo largo de esta presentación, la imputada estaba tratando de ingresar a la casa de Pontarolo mientras estaba en pareja con González y vivía en el domicilio de este último, pero no obstante todo eso, circulaba por el barrio con bolsas con mercadería y bolsos con ropa. Como puede advertirse, un argumento completamente disparatado.

- La defensa argumentó que la imputada fue víctima de violencia de género por parte de “distintas parejas” pero, sin embargo, en oportunidad de prestar declaración a tenor del art. 172 del CPP, la imputada, nada dijo al respecto y se negó a declarar. Incluso, cuando prestó declaración en el marco de la audiencia de prisión preventiva, nada dijo al respecto, simplemente negó la imputación y dijo que hizo un tratamiento en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) para afrontar las adicciones y que desea conseguir un empleo y que tiene buena relación con su hija. Como puede advertirse, de la situación de violencia de género, nada y poco. La imputada, no hizo ninguna mención y tampoco explicó, en que habría consistido y quién habría sido el autor o los autores.

- La defensa argumentó, con base en un informe social producido

por la Defensoría General de la Nación en otra causa, es decir, en el marco del proceso penal en el que se le imputó a Mangano la comisión del delito de homicidio, que la víctima tuvo un historial de vida traumático, que fue víctima de situaciones de violencia y de abusos y que, durante un tiempo, ejerció la prostitución, lo a criterio de la defensa pública explica sus conductas y, entre otras cosas, que tuviera los cuchillos entre sus pertenencias para poder defenderse debido a los encuentros sexuales que tuvo en el marco de la profesión que ejerció. En este sentido, la Defensa cuestionó que la Fiscalía no actuó –en el contexto advertido– con el mismo celo que lo hace, habitualmente, con otros casos de violencia contra las mujeres.

Al respecto, este Ministerio Público Fiscal, replicó que las situaciones alegadas por la defensa, en cuanto a la existencia de un contexto de violencia de género, no fue probada en el caso y que, es una exigencia de los precedentes en la materia que, la relevancia de su historia de vida, debe guardar alguna conexión con los hechos del caso. Esta Fiscalía, explicó que conforme los criterios generales de actuación dispuestos por el Sr. Fiscal General, los hechos de este caso, pasaron por el tamiz y fueron analizados a luz de los principales precedentes en materia de personas imputadas víctimas de violencia de género.

En este sentido, se ha evaluado el hecho a la luz de todos los casos reciente de la jurisprudencia más destacada y, en el marco de la audiencia, este Ministerio Público, explicó que de conformidad con la doctrina del precedente, ninguno se ajusta o es compatibles con los hechos aquí investigados.

Los precedentes citados fueron: 1) El caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2011, “L.M.C.”, que se trató de un caso de legítima defensa en un caso de homicidio de una imputada víctima de violencia de género que mató a su esposo en el contexto de un hecho de violencia de género; 2) El caso de la Cámara Nacional de Casación Penal del año 2013, “K.S.N.”, que se trató de un caso de abandono de persona seguido de muerte en el que una imputada víctima de violencia de género omitió alimentar a su niño, en el contexto de violencia de género en una situación de violencia doméstica;

3) El caso de la Cámara Federal de Casación Penal del año 2021, “Casco”, que se trató de un caso de trata de personas, en el cual si bien se descartó la aplicación directa al caso del art. 5 de la Ley de Trata de Personas, habida cuenta los hechos y las características del caso, en el cual las imputadas habían ejercido la prostitución durante prácticamente todas sus vidas y habían regentado y administrado comercialmente las casas de tolerancia, el hecho de haber sido víctimas de violencia de género, implicó una reducción de la escala punitiva y la perforación del mínimo legal establecido; y 4) El caso de la Cámara Federal de Casación Penal del año 2021, “Vázquez”, en el cual en un caso de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización del art. 5, inciso “c” de la Ley Nº 27.737, se interpretó que, la situación de violencia de género en la que se encontraba la imputada, obligaba a reducir la escala penal prevista para dicho delito, de conformidad con el principio establecido por la dogmática, conocido como culpabilidad por vulnerabilidad.

Esta Unidad, dejó en claro que los hechos de este caso no se ajustaban a las respuestas excepcionales que brindaron los tribunales cuando si se tuvieron en cuenta las historias de vida de las personas imputadas víctimas de violencia de género.

En este aspecto, esta Fiscalía advirtió que aun cuando la defensa no logró acreditar que estuviéramos frente a un caso de una imputada víctima de violencia de género, tampoco pudo conectar las alegaciones relacionadas con su historial de vida con los hechos de este caso y explicar cómo habrían tenido algún grado de incidencia, como sucedió, por citar algunos ejemplos, en el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Tejerina” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el reciente fallo “Hugui” de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En todos estos precedentes, se hizo especial hincapié a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, con especial atención a la historia de vida de cada una de las personas imputadas, que por distintas razones y por las particulares y excepcionales circunstancias de hecho de cada uno de esos casos, fueron relevantes –producto de su conexión directa con los hechos del caso– de la solución adoptada.

Como puede observarse, a diferencia de las alegaciones de la defensa, esta Fiscalía ha requerido dichas medida cautelar sin perder de vista la perspectiva de género y el particular enfoque que requieren los casos en los que se alega que pudo haber existido alguna forma de violencia contra las mujeres.

Ahora bien, estas particularidades que alego la defensa sin efectuar ninguna conexión con los hechos del caso, si bien no fueron tenidas en cuenta por el Sr. Juez, después de las réplicas de esta parte y, por lo tanto, fueron descartadas, han sido enunciadas en el marco de la audiencia con el objeto de poner en crisis la materialidad de los hechos imputados a Mangano.

Llegado este punto, considero que todos los intentos de la defensa han merecido una réplica y una refutación por parte de esta Fiscalía y, no obstante, subsisten los testimonios que ya se han logrado incorporar en el marco del sumario policial primigeniamente labrado, y de las demás constancias probatorias agregadas las que dan cuenta, de manera elocuente del obrar delictivo de la imputada.

3.- Ahora bien, afirmada la existencia de mérito sustantivo -en los términos del art. 184, 2º párrafo, del CPP-, ahora debo referirme a la presencia de los riesgos procesales que, a criterio de esta parte existen y justifican el pedido efectuado, en los términos de los artículos 181 y 182 del Código Procesal Penal.

Ello así, sin desconocer que, efectivamente, como medida cautelar que limita la libertad ambulatoria de la imputada presuntamente inocente, sólo debe aplicarse en forma restringida y exclusivamente cuando medien razones concretas que permitan deducir la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso.

Nuestra normativa procedimental es clara al respecto e incluso brinda al operador judicial algunas pautas para tener por configurados dichos riesgos procesales (artículos 181 y 182 del CPP).

En virtud de ellas, entiendo que tal como planteé en primera instancia, en el caso se verifican ambos riesgos procesales, tanto el de fuga como el de entorpecimiento de la investigación.

El peligro de fuga.

a.- El dictado de una sentencia condenatoria, de conformidad con el art. 180, inciso 5º del CPP, constituye uno de los parámetros objetivos para tener por acreditada la existencia de dicho riesgo procesal.

En efecto, hace un mes, exactamente el día 1/4/2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18, en el marco de la causa Nº 54.095/2020, condenó previo acuerdo de juicio abreviado y reconocimiento de los hechos a la imputada, de conformidad con el art. 431 bis del CPPN, a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo.

En consecuencia, en el caso de **recaer condena** en el presente proceso, la misma será de **cumplimiento efectivo**.

Cabe destacar que, **no** es posible aplicar una suspensión del proceso a prueba en este proceso, dado que la imputada ha sido condenada sino que, además, el día 19/4/2017 se le **concedió una suspensión del proceso a prueba** por el término de un (1) año, en el marco de la causa Nº 23.162/2017, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.

Al respecto, **no** habría sido posible tampoco, aplicar una **segunda suspensión del proceso a prueba** toda vez que no transcurrió aún el plazo legal establecido por el art. 76 ter, 6º párrafo del CP. Es decir, no pasaron los **ocho años** para una segunda suspensión del procesal a prueba.

Por otra parte, **no** es tampoco posible aplicar una **condenación condicional** toda vez que la imputada fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18, hace aproximadamente **un mes**. Ello, de conforme los arts. 26 y 27 del CP.

En suma, como fuera señalado, en caso de **recaer condena en este proceso** –como sucedió hace un mes– la misma será de **cumplimiento efectivo**, lo cual permite presumir de manera fundada y objetiva que existe el riesgo procesal del peligro de fuga.

Además, así surge de la información suministrada por el Registro Nacional de Reinidencia, y de las certificaciones luego efectuadas.

b.- El pedido de aplicación de pena de prisión o reclusión de efectivo cumplimiento solicitado por la Fiscalía, de conformidad con lo establecido en el art. 180, inciso 4º del CPP.

En efecto, **hace quince (15) días**, exactamente, el día 19/4/2022, el Sr. Fiscal, Dr. Néstor Maragliano, la Sra. Defensora Oficial, la Dra. Carolina Spósito y la aquí imputada Mangano, celebraron un **acuerdo de advenimiento y de unificación de penas con el proceso anterior**, en orden a los hechos por los cuales, el día 26/12/2019, en el marco del caso MPF 397888 de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 25, **formuló un requerimiento de elevación a juicio**.

En consecuencia, el pedido de aplicación de pena de prisión o reclusión de efectivo cumplimiento solicitado por el Sr. Fiscal Coordinador de esta Unidad de Flagrancia Oeste, en el marco del acuerdo de advenimiento y de unificación de pena, consentido por la Defensa legal y técnica y por la propia imputada, constituye un

documento preciso y cierto, en el cual consta la pretensión acusatoria y, por lo tanto, se verifica y configura la causal objetiva del peligro de fuga.

Dicho acuerdo de advenimiento y de unificación de pena se encuentra a la espera de ser homologado o rechazado por el mismo magistrado que intervino en el caso.

En función de lo expuesto, en caso de **recaer condena en el presente caso**, al igual que sucedió hace un mes en el **Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18**, la pena **será de cumplimiento efectivo**, lo cual hace presumir de manera fundada y objetiva que se verifica, en este caso y por este supuesto, el riesgo procesal del peligro de fuga.

c.- La falta de arraigo, de conformidad con lo establecido en el art. 180, inciso 1º del CPP, ha sido precisada en el precedente "Aliandre" de la Cámara Nacional de Casación Penal y, se relaciona con los costes afectivos o personales que deberá afrontar la imputada en el caso de que decida fugarse, de manera tal de poder efectuar un pronóstico del comportamiento de la imputada en el proceso.

En este sentido, conforme se desprende de las constancias acompañadas al sumario, Mangano se encuentra **en situación de calle** y dicha circunstancia, ha sido comprobada y verificada a través de todos los testimonios quienes fueron claros en que, desde el día 4 de Abril del 2022, cuando la imputada quedó en libertad en el proceso que tramitó ante la Justicia Nacional, esta última se encuentra dando vueltas por el barrio y que en forma reiterada se presenta en los domicilios de Walter Fabián González y de Armando Pontarollo, con el objeto de ingresar a esas casas a la fuerza, con la intención de quedarse y permanecer en esos inmuebles.

De hecho, conforme se desprende del acta de intimación del hecho (art. 172 del CPP), la imputada, fijó como domicilio real el domicilio sito en la calle Uruguay Nro. 69 de la ciudad donde funciona la fundación "NTD" ABA Buenos Aires y, en el informe social, se hizo mención a que se encuentra en situación de calle, no tiene trabajo, no tiene un domicilio fijo de algún amigo, familiar o pariente y, tampoco cuentas con lazos familiares o afectivos.

En este punto, cabe mencionar que el domicilio informado por la defensa, esto es la fundación aludida y la falta de un domicilio fijo de algún familiar o amigo, han impedido que a la imputada se le asigne una tobillera de geo-posicionamiento que garantice su ubicación y comparecencia al juicio. Además, dicha medida no resulta viable puesto que la imputada no reside en la fundación aludida y por lo tanto no es posible y tampoco viable la implementación de dicho dispositivo de control electrónico.

El riesgo de entorpecimiento del proceso.

Llegado a este punto, de la objetiva valoración de los antecedentes penales de la imputada, se desprende sin lugar a dudas de que se trata de una persona violenta, en situación de calle y sin lazos familiares ni afectivos. A su vez, que ha sido sometida a distintos procesos y que ha sido condenada en un establecimiento carcelario sin que, hasta el momento haya logrado internalizar los límites normativos establecidos por la comunidad. Ello, toda vez que como resulta evidente la imputada no tiene ningún apego a las normas.

Estas circunstancias objetivas, me hacen **sospechar fundamentalmente** que, la libertad de la imputada pondrá en peligro la investigación, toda vez que la nombrada tiene la capacidad de poder intimidar a la víctima, al denunciante y los testigos presenciales.

La pena en el caso en concreto.

Entonces, debe tenerse en cuenta que solo por los hechos determinados en el marco de este proceso, al concurrir todos ellos en forma real y por tratarse de procesos donde se investigan hechos que ocurrieron con diferencias de días y de horas, resulta altamente probable que los hechos de los que fueran víctimas Walter Fabián González y Armando Pontarollo, finalmente se unifiquen, tramiten en forma conjunta y que, conforme las reglas del concurso de delitos, la escala penal para el concurso delitos previstos tenga un monto de pena alto.

Pero además, a la luz de las previsiones del art. 41 del CP, dicha sanción podría más que razonablemente apartarse del mínimo de la escala penal prevista, si se tiene en cuenta la gravedad de todos los comportamientos reiterados desplegados por la imputada, la reiteración, la cantidad de víctimas y la existencia de condenas anteriores.

A la vez, es de remarcar que la pena en expectativa podría ser aún mayor, si oportunamente se unifica -en los términos del art. 58 del CP-, la condena que podría recaer en este proceso con aquella en que se encuentra pendiente la homologación o no del acuerdo de advenimiento; determinará que cumpla pena de prisión efectiva.

Esta expectativa de pena, conforme la voluntad legislativa, y pese a la interpretación de la defensa, resulta ser una pauta objetiva de que el imputado podría eludir el juicio en caso de mantenerse en libertad, precisadamente con el objeto de no someterse voluntariamente al probable encierro que pudiera corresponderle en caso de ser condenado; tornando entonces necesaria la medida solicitada, para asegurar el proceso y poder realizar el juicio oral y público.

Este razonamiento no puede interpretarse que se este afectando el principio de inocencia, porque la prisión preventiva no tiene el carácter de una pena anticipada, sino que a partir de la pena en expectativa, por las razones esgrimidas precedentemente, puede deducirse la existencia del peligro de fuga y la posibilidad cierta de que la imputada no se someta voluntariamente al resultado de este proceso. Prueba de ello, han sido las advertencias efectuadas por el Sr. Juez en su fallo.

En este sentido, el fallo "Gotelli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se estableció que debe ponderarse que "el derecho constitucional a permanecer en libertad durante el debido proceso previo encuentra su reglamentación razonable, en este caso, en las normas del Código de Procedimientos en Materia penal que regulan la procedencia de eximición de prisión... Sin embargo, dicha reglamentación puede perder ese carácter si su aplicación automática -en supuestos de extrema excepción- destruye el delicado equilibrio entre el interés individual y el interés general.... Y ello ocurrirá cuando la detención cautelar no encuentre respaldo en la estricta necesidad de asegurar la consecución de los fines del proceso penal" (C.S.J.N. "Gotelli Luis M. s/ eximición de prisión", rta.: 7/9/1993).

De la misma manera, nuestro máximo tribunal sostuvo que: "en este contexto, el legislador nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 75, inc. 30 de la Constitución Nacional, estableció un régimen general que regula la libertad durante el proceso y que, en lo que aquí concierne, contempla como supuestos de excarcelación aquellos en los que pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los 8 (ocho) años de pena privativa de la libertad y también en los que, no obstante ello, el juez estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional (art. 317, inc. 1º Código Procesal Penal de la Nación). La restricción de la libertad se funda en ambos casos en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación. 9º) Que el criterio utilizado por el legislador para establecer esa presunción se vincula con el monto máximo de la pena considerada en abstracto que fijó para los distintos delitos enumerados en el Código Penal en ejercicio de la prerrogativa que le otorga el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional para declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (Fallos: 11: 405; 191: 245; 275: 89) y, asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente" (C.S.J.N. "Nápoli Erika s/art. 139 bis", rta.: 22/12/1998).

Los precedentes citados demuestran que nuestro máximo tribunal veda la aplicación automática de la pena en expectativa como único fundamento de la prisión preventiva, pero admite su consideración razonable cuando, aunada a otros elementos, permite suponer que la imputada eludirá el accionar judicial, frustrándose así la realización del juicio.

Dando un paso más, en el fallo "Panceira" la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la evaluación conjetural de aplicar o no en el futuro una condena de ejecución condicional aun cuando la escala en sí misma lo permitiera, ya que el tribunal no rechazó la imposición de la prisión preventiva por haber considerado la instancia anterior que podía llegar a aplicarse en el caso una pena efectiva, sino en virtud de que los magistrados inferiores no habían fundado ni siquiera mínimamente esta afirmación en los elementos de prueba reunidos en la causa (conforme C.S.J.N. "Panceira Gonzalo y otros s/ asociación ilícita", rta.: 16/5/2001).

Teniendo en cuenta tan solo este precedente que actualmente también se siguen en contra de la imputada –advenimiento no homologado–, bastaría para poder afirmar que el comportamiento de la nombrada en este y en otros procesos no darían la pauta de que cuenta con la voluntad de someterse a la persecución penal; más bien todo lo contrario.

Además, a diferencia de lo aquí resuelto, entiendo que el comportamiento en este proceso tampoco indicó su voluntad de estar a derecho. Debe ponderarse cómo actuó ante las intervenciones policiales. En ningún momento se allanó a las órdenes impartidas y, lejos de eso, desafió permanentemente a la autoridad, agrediendo físicamente y evidenciando un comportamiento vinculado a actitud de impunidad. En suma, más allá de la fortaleza del cuadro probatorio con el que actualmente cuenta la Fiscalía, teniendo en cuenta que aún sería posible dar con mayores evidencias, cuya recolección ciertamente se encuentra en peligro dada la actual situación, lo cierto es que, por lo pronto, manteniéndose a la imputada en libertad, sin dudas y de cara al juicio, pone en peligro la evidencia con la que esta parte cuenta.

Así, teniendo en cuenta la particular gravedad de los hechos, entiendo que debe revertirse la decisión, para asegurar la evidencia con la que cuenta el MPF, así como para permitir que se desarrolle esta pesquisa con la normalidad necesaria.

Reitero, si se mantiene la libertad de la acusada, bien podría obstruir la investigación, imposibilitando que se amplíe el objeto procesal y/o que se robustezca el

Finalmente debo agregar, en línea con este razonamiento, y tal como sostuve anteriormente que, ante el panorama descripto, tampoco advierto de qué otro modo menos lesivo sería posible neutralizar los riegos en cuestión; siendo que cualquier otra medida alternativa, fueron descartadas porque no resultan viables. Y lo cierto es que, por las razones antedichas, y siendo que la imputada se encuentra perfectamente al tanto de todas las investigaciones penales seguidas en su contra por los graves que ha venido cometiendo, junto al probable encierro que enfrenta, solo podría suponerse que la eventual confianza que se pueda depositar en él, manteniéndole únicamente esa medida restrictiva alternativa, redundará en un seguro entorpecimiento del trabajo investigativo de la Fiscalía o bien en la fuga del reo.

respetto de Norma Mabel Mangano.

apelación y se remita para su resolución a la Cámara de Apelaciones del fuero, a efectos que se revoque la resolución adoptada, en cuando rechazó la prisión preventiva requerida

respecto de Norma Mabel Mangano.

nos Aires, 9 de Mayo de 2022.

